

PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

Por lo menos, no sonreír Bofetada tras bofetada

Es cierto que la vasta y compleja trama de las relaciones de México y Estados Unidos no puede quedar en entredicho por un asunto judicial, así sea el de mayor envergadura en los años recientes. Pero también lo es que el insolente desdén con que nuestro gobierno ha sido tratado en torno del secuestro, y el posterior enjuiciamiento de un médico mexicano presuntamente cómplice en el asesinato de Enrique Camarena; y la violencia que contra los mexicanos está efervesciendo en la frontera, son bofetadas que no podemos recibir sonrientes, como si carecieran de importancia; como si temiéramos, al acusar el golpe, irritar al gobierno y a la nación en la que, por desgracia —y por error— estamos cifrando parte del futuro nacional.

mercial de México.

Ahora, la situación ha cambiado radicalmente por el proceso de apertura comercial de México y, sobre todo, a raíz de la anunciada disposición del gobierno mexicano de firmar un acuerdo de libre comercio con el vecino país, decisión a la cual contribuyó de manera decisiva la consulta nacional conducida por la propia Cámara de Senadores, organismo que en razón de su facultad constitucional de vigilar la política exterior, también se manifestó en favor de ese convenio.

Por contrapartida, en el mismo sector comercial se mantienen vigentes las demandas mexicanas de reciprocidad por parte de Estados Unidos, que por medio de diversos recursos ha interpuesto barreras a las exportaciones nacionales.

PLAZA PUBLICA

Viene de la 1

Es sabido que las buenas maneras, que la cortesía diplomática, no son el fuerte de los presidentes norteamericanos. Los más recientes de entre ellos protagonizan el aberrante caso de aldeanos dirigiendo una potencia internacional. Ayer, el huésped principal de la Casa Blanca, poco antes de recibir a los legisladores mexicanos que acuden a reunirse como cada año con sus colegas estadounidenses, desestimó de manera desaprensiva el pedido mexicano de que sea devuelto a México Humberto Alvarez Machain. No se produjo una nota formal del Departamento de Estado en respuesta a la también formal solicitud de la Cancillería. En conferencia de prensa —en que el tema fue abordado tangencialmente— Bush ni siquiera intentó deplorar el hecho, antes de explicar que el asunto está fuera del ámbito de sus decisiones. Con ambigüedad sugirió que “el Presidente

de México sabe que no hicimos nada ilegal”. Tal afirmación muestra desinformación o mendacidad, pues autoridades norteamericanas reconocieron por escrito ante una corte federal haber pagado cincuenta mil dólares por la organización del secuestro, según publicó el sábado 19, ante la propia nariz de Bush, *The Washington Post*.

Por lo tanto, Alvarez Machain seguirá siendo juzgado en contravención a reglas elementales del derecho. No sólo eso. El juicio está sirviendo como escenario para una incomprensible e irresponsable atribución de culpas a personajes mexicanos a quienes testigos sin ninguna calificación, comprados con dinero o inmunidad, inmiscuyen en opiniones que carecen, hasta ahora, de valor legal, pero cumplen un efecto difamador. Pudiera ser que alguno de esos involucrados no haya sido citado aquí por temor a consecuencias políticas incontrolables, como puede ser el caso de un alto jefe militar,

cuyo entredicho desazonara al Ejército. Pero también podría ocurrir que no se le hubiera convocado ante la justicia en México porque no exista responsabilidad alguna en su contra, o no haya modo de sustanciarla procesalmente. Su frívola inclusión en las actas del juicio angelino produce, además, la sensación de un contraste perjudicial, que consiste en sugerir que allá sí se atreven a enjuiciarlos, al contrario de nuestra timoratería o corrupción, que impide hacerlo aquí.

Simultáneamente, en la franja fronteriza, especialmente en las inmediaciones de Tijuana y San Diego, se agita el fango antimexicano, el racismo más desembozado, que ha llegado al crimen y a la obcecación propagandística contra los migrantes mexicanos, documentados o no. Sólo un imbécil acusaría al gobierno de México de *usar* el cadáver de Emilio Jiménez, el niño de 12 años asesinado hace una semana, si se esgrime su muerte como caso extremo pero no único del cre-

ciente hostigamiento contra los mexicanos. Frente a tal manifestación de irracionalidad cumple sólo intensificar la protección de nuestros nacionales, y litigar en pro del castigo de quienes sean punibles. Pero también podemos ventilar esos hechos en todo foro, para denunciarlos políticamente. El de la Reunión Interparlamentaria que hoy se inicia en Boston es idóneo para ello, aunque carezca de consecuencias prácticas.

Pero podemos hacer algo más. Por prestancia nacional, por dignidad, que no son valores periclitados, pongamos al menos un rostro adusto en nuestro trato con aquel gobierno. En casos así, una sonrisa tiene mucho de lacayuna. Y cuando dentro de dos semanas vaya a Washington el presidente Salinas, no olvidemos en aras de la buena vecindad lo que hoy está ocurriendo, y no festejemos los lazos que ya nos atan y nos aherrojan más todavía, como si fueran una bendición.

La Jornada

Víenes 25/mayo/90